

ANUARIO 2010
DE LA SEGURIDAD REGIONAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

HANS MATHIEU / CATALINA NIÑO GUARNIZO
EDITORES

**FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG**

**Programa de Cooperación
en Seguridad Regional**



ANUARIO 2010 DE LA SEGURIDAD REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

© Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol)

Calle 71 n° 11-90, Bogotá

Teléfono 57 (1) 347 30 77

Fax 57 (1) 217 31 15

Correo electrónico fescol@fescol.org.co

PRIMERA EDICIÓN

Bogotá, octubre de 2010

ISSN 2216-1082

COORDINACIÓN EDITORIAL

Juan Andrés Valderrama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Ángela Lucía Vargas

DISEÑO CARÁTULA

Camila Cesarino Costa

IMPRESIÓN

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	XXI
--	-----

PARTE I

SEGURIDAD REGIONAL

LA SEGURIDAD DE AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA: ENTRE LA GEOPOLÍTICA, LA IDEOLOGÍA Y LAS AMENAZAS EMERGENTES <i>Raúl Benítez Manaut / Pablo Celi / Francine Jácome</i>	3
EL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO: NATURALEZA, BALANCE PROVISORIO, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS <i>José Manuel Ugarte</i>	25
HAITÍ, MÁS ALLÁ DEL TERREMOTO: NUEVO CAPÍTULO DE UN VIEJO DRAMA Y RETOS GEOPOLÍTICOS DE BRASIL Y LA REGIÓN <i>Julián González Guyer</i>	43
LA CRISIS DE HONDURAS Y SU REPERCUSIÓN REGIONAL <i>Orlando J. Pérez</i>	58
LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD REGIONAL <i>Francisco Leal Buitrago</i>	73

PARTE II

LA SEGURIDAD INTERNA, EXTERNA Y REGIONAL DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

LOS ESCENARIOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD EN ARGENTINA A FINALES DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI <i>Mariano Ciafardini / José Manuel Ugarte</i>	85
SEGURIDAD Y DEFENSA EN BRASIL EN 2009: AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DE UN DISEÑO ESTRATÉGICO <i>Alcides Costa Vaz / Artur Andrade da Silva Machado</i>	104
EL CARIBE: LA COMPLEJA COYUNTURA DE LA SEGURIDAD REGIONAL <i>Jorge Rodríguez Beruff</i>	114
CHILE: EL ESCENARIO DE LA DEFENSA Y SU PROYECCIÓN REGIONAL <i>Boris Yopo H. / María Inés Ruz</i>	126
COLOMBIA: ESTADO DEL CONFLICTO ARMADO AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ÁLVARO URIBE <i>Camilo Echandía Castilla / Eduardo Bechara Gómez / Irene Cabrera Nossa</i>	136
MÉXICO: EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO, LA VIOLENCIA Y LAS DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD NACIONAL <i>Raúl Benítez Manaut / Armando Rodríguez Luna</i>	173
PARAGUAY, UN ESCENARIO CONFUSO Y CAMBIANTE <i>Diego Abente Brun</i>	187
DEFENSA, SEGURIDAD Y POLÍTICA EXTERNA EN PERÚ, 2008-2010: PRAGMATISMO Y CORTO PLAZO <i>Eduardo Toche</i>	194
URUGUAY, CLAROSCUROS DE LA PRIMERA GESTIÓN DE IZQUIERDA EN EL GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO MUJICA <i>Julián González</i>	205
POLÍTICAS Y CONCEPTOS DE SEGURIDAD EN ALGUNOS PAÍSES DE LA ALBA	
LOS CAMBIOS EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA DEFENSA EN LA “REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA” DE EVO MORALES <i>Sonia Alda Mejías</i>	221
“AQUÍ NO SE RINDE NADIE”: SEGURIDAD Y DEFENSA CUBANA EN CONTEXTO <i>Hal Klepak</i>	242

CONTENIDO

ECUADOR, TENSIONES BILATERALES Y REFORMAS INSTITUCIONALES EN SEGURIDAD Y DEFENSA <i>Pablo Celi</i>	255
NICARAGUA, UN ESTADO SIN POLÍTICA DE SEGURIDAD <i>Roberto Cajina</i>	267
VENEZUELA: DEFENSA Y SEGURIDAD. BOLIVARIANISMO Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXI <i>Francine Jácome</i>	286

PARTE III

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE <i>Marcelo Fabián Sain</i>	313
CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO Y SUS VÍNCULOS CON ESTADOS UNIDOS <i>Bruce Bagley / Aline Hernández</i>	328
CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA, LA PERSPECTIVA EUROPEA <i>Daniel Brombacher</i>	379
VICIOS PRIVADOS, ¿BENEFICIO PÚBLICO?: CRIMEN ORGANIZADO EN EL CARIBE <i>Lilian Bobea</i>	395
LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA CON ÉNFASIS EN EL CRIMEN ORGANIZADO <i>Max Alberto Loría Ramírez</i>	416
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA, 2008-2009 <i>Markus Schultze-Kraft</i>	436
SEGURIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MARCO DE ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO <i>William Godnick</i>	456
MAPEAMENTO SOBRE A INSTITUCIONALIDADE POLICIAL NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE <i>Haydée Caruso / Rachel Maître</i>	469
RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES	487

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

HAITÍ, MÁS ALLÁ DEL TERREMOTO: NUEVO CAPÍTULO DE UN VIEJO DRAMA Y RETOS GEOPOLÍTICOS DE BRASIL Y LA REGIÓN

Minustah.	Cuadro resumen	52
-----------	----------------	----

LA CRISIS DE HONDURAS Y SU REPERCUSIÓN REGIONAL

Gráfico 1.	Apoyo a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente	67
Gráfico 2.	Apoyo a la reelección presidencial	68
Gráfico 3.	La destitución del presidente Zelaya fue un golpe de estado	68
Gráfico 4.	Apoyo a la destitución y exilio del presidente Zelaya	68

COLOMBIA: ESTADO DEL CONFLICTO ARMADO AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ÁLVARO URIBE

Gráfico 1.	Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 1998-2009	139
Gráfico 2.	Combates de las fuerzas militares contra los grupos irregulares, 1998-2009	140
Gráfico 3.	Actividad armada de los grupos irregulares, 1998-2009	141
Gráfico 4A.	Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 2008	146
Gráfico 4B.	Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 2009	146
Gráfico 5.	Acciones más recurrentes de los grupos irregulares, 1998-2009	147
Gráfico 6.	Comparación del número de víctimas por homicidios y masacres, 1997-2009	152
Gráfico 7.	Comparación del número de homicidios, 2008 y 2009	153
Mapa 1A.	Combates en 2008	155
Mapa 1B.	Combates en 2009	155
Mapa 2A.	Acciones irregulares en 2008	156
Mapa 2B.	Acciones irregulares en 2009	156
Mapa 3A.	Acciones de mayor esfuerzo militar, 2009	157
Mapa 3B.	Acciones de menor esfuerzo militar, 2009	157

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

Mapa 4.	Correlación de fuerzas, 2009	158
Mapa 5A.	Municipios con presencia de cultivos de coca y eventos MAP y Muse, 2009	159
Mapa 5B.	Municipios con presencia de combates y eventos MAP y Muse, 2009	159
Mapa 6A.	Eventos por MAP y Muse, 2008	160
Mapa 6B.	Eventos por MAP y Muse, 2009	160
Mapa 7A.	Masacres realizadas en 2008	161
Mapa 7B.	Masacres realizadas en 2009	161
Mapa 8A.	Tasas de homicidios en los municipios, 2008	162
Mapa 8B.	Tasas de homicidios en los municipios, 2009	162
Mapa 9A.	Municipios con disminución de la tasa de homicidios, 2009	163
Mapa 9B.	Municipios con aumento de la tasa de homicidios, 2009	163

MÉXICO: EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO, LA VIOLENCIA Y LAS DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Gráfico 1.	Ejecuciones en México, 2001-2010	174
Tabla 1.	Quejas de la CNDH a la Sedena, 2006-2010	179
Tabla 2.	Recomendaciones de la CNDH a la Sedena, diciembre 2006-julio 2010	179
Tabla 3.	Elementos de todos los cuerpos policiales de México (enero 2009)	180
Tabla 4.	Alianzas de narcotraficantes mexicanos y colombianos, 2010	181
Tabla 5.	Países utilizados para el tráfico de drogas por carteles mexicanos, de Colombia hacia Estados Unidos	181

URUGUAY, CLAROSCUROS DE LA PRIMERA GESTIÓN DE IZQUIERDA EN EL GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO MUJICA

Tabla 1.	Uruguay, cantidad de denuncias de delitos totales y de otros delitos, 2007-2009	210
Gráfico 1.	Uruguay, homicidios y tentativas de homicidio, 2007-2009	211
Tabla 2.	Uruguay, cantidad de denuncias por delitos contra la propiedad, 2007-2009	211
Tabla 3.	Uruguay, cantidad de denuncias por delitos sexuales, 2007-2009	211

ECUADOR, TENSIONES BILATERALES Y REFORMAS INSTITUCIONALES EN SEGURIDAD Y DEFENSA

Tabla 1.	Policía Nacional, asignación presupuestal, por componentes	261
Tabla 2.	Principales adquisiciones militares proyectadas	263
Tabla 3.	Ecuador: acuerdos de cooperación multilateral en seguridad, 2008-2009	265
Tabla 4.	Ecuador: acuerdos de cooperación bilateral en seguridad, 2008-2009	266

NICARAGUA, UN ESTADO SIN POLÍTICA DE SEGURIDAD

Tabla 1.	Detalle de cargos Ministerio de Defensa-Ejército, 2005-2009	269
Diagrama 1.	Organigrama del Ejército de Nicaragua	269
Tabla 2.	Detalle de cargos del Ministerio de Gobernación, 2005-2009	270

Diagrama 2.	Organigrama de la Policía Nacional de Nicaragua	270
Tabla 3.	Distribución de grados policiales, por sexo, 2007	271
Tabla 4.	Policía: despliegue territorial, por delegaciones, 2007	272
Gráfico 1.	Empresas de seguridad privada, 1990-2009	275
Tabla 5.	PGR-Presupuesto de defensa, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes)	280
Tabla 6.	Relación presupuestal entre Ministerio de Defensa y Ejército, 2005-2009	280
Tabla 7.	Presupuesto de defensa: distribución porcentual, 2005-2008 (por rubro)	280
Tabla 8.	PGR-Presupuesto Ministerio de Gobernación, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes)	281
Tabla 9.	Relación presupuestal entre Ministerio de Gobernación-Policía, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes)	281
Tabla 10.	Comparativo porcentual de los gastos social, de seguridad y de defensa, 2005-2009	281

VENEZUELA: DEFENSA Y SEGURIDAD. BOLIVARIANISMO Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Diagrama 1.	Estructura orgánica de la Policía Nacional	294
Tabla 1.	Adquisiciones militares, 2004-2008	298
Tabla 2.	Principales adquisiciones de armamento y equipos, 2005-2008	299
Tabla 3.	Presupuesto nacional, rubro de seguridad, 2009 y 2010 (proyecciones)	300

CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO Y SUS VÍNCULOS CON ESTADOS UNIDOS

Gráfico 1.	Porcentaje de la población adulta víctima de un crimen, México, 2007	346
Figura 1.	México, termómetro del delito	347
Tabla 1.	Porcentajes de denuncia a la policía de cinco delitos en países y ciudades	348
Tabla 2.	Porcentajes de no averiguación previa del total de delitos	349
Tabla 3.	Denuncias recibidas y pérdidas en dólares en casos de fraude electrónico en Estados Unidos, 2004-2008	354
Tabla 4.	Tasa per cápita de autores de crímenes electrónicos en Estados Unidos	354
Tabla 5.	Tasas per cápita de denunciantes de crímenes electrónicos en Estados Unidos, por 100.000 habitantes	355
Mapa 1.	Rutas del tráfico ilícito de drogas y personas	361
Mapa 2.	Principales rutas de tráfico de drogas	362
Mapa 3.	Actividad marítima sospechosa, 1 de enero-20 de diciembre de 2005	363
Mapas 4 y 4A.	Patrones de vuelos sospechosos de tráfico de drogas, 2003 y 2009	364
Mapa 5.	Principales destinos del tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos (pasando por México), precios por gramo (1999 y 2005) y toneladas por país (2005)	365
Mapa 6.	Principales áreas de operaciones de los carteles mexicanos más importantes	366
Mapa 7.	Principales áreas de influencia y rutas de tráfico de los carteles mexicanos más importantes, 2008	367
Mapa 8.	Distribución de los grandes grupos del narcotráfico en México, julio de 2009	368

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

Mapa 9.	Uso de la droga en el mundo	369
Mapa 10.	Los diez estados con más casos de fraude electrónico en Estados Unidos	370
Mapa 11.	Diez países donde se comenten más crímenes electrónicos	371
Mapa 12.	Diez estados de Estados Unidos donde se denuncian más crímenes electrónicos	372
Mapa 13.	Diez países donde se denuncian más crímenes electrónicos	373
Mapa 14.	Estados mexicanos donde se recibieron reportes de operaciones inusuales	374

CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA, LA PERSPECTIVA EUROPEA

Gráfico 1.	Cocaína incautada, países europeos seleccionados, 2002-2008	382
Gráfico 2.	Delitos relacionados con la cocaína, países europeos seleccionados, 2001-2007	382
Mapa 1.	Rutas principales del tráfico de drogas	384
Gráfico 3.	Precio promedio de un gramo de cocaína al por menor, 2007 (países seleccionados)	388
Gráfico 4.	Delitos relacionados con la trata de personas latinoamericanas (grupos significativos)	390
Gráfico 5.	Origen de las armas entregadas por las AUC (Colombia), 2003-2006	391

VICIOS PRIVADOS, ¿BENEFICIO PÚBLICO?: CRIMEN ORGANIZADO EN EL CARIBE

Tabla 1.	Índice de muertes violentas en Centroamérica y la República Dominicana, 1999-2007	403
Tabla 2.	Muertes violentas en República Dominicana, 2008	403
Diagrama 1		405
Tabla 3.	Impactos en diversos ámbitos de la criminalidad y la violencia organizada por medio del narcotráfico y el microtráfico en República Dominicana	405
Tabla 4.	Causas de las muertes violentas en República Dominicana, 2006-2008	407
Tabla 5.	Niveles de coordinación nacional e internacional y acuerdos interagenciales concertados por el gobierno dominicano	410

LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA CON ÉNFASIS EN EL CRIMEN ORGANIZADO

Figura 1.	Esquema de organización de las actividades del crimen organizado	418
Tabla 1.	Incautaciones de cocaína en base y clorhidrato (kg), 2000-2008	419
Gráfico 1.	Incautaciones de cocaína por años, en miles de kilos, 2000-2008	420
Tabla 2.	Detenidos por narcotráfico, 2000-2007 (tasa por 100.000 habitantes)	421
Tabla 3.	Presupuestos nacionales para la lucha contra las drogas, 2001-2006 (en millones de dólares)	421
Tabla 4.	Cambio de presupuesto en los gastos asignados para la lucha contra las drogas, 2002 y 2006	422
Tabla 5.	América Central: casos de trata de personas denunciados e investigados, 2003-2008	423
Tabla 6.	Incautaciones de armas ilícitas, 2000-2006	424
Tabla 7.	Armas ilícitas incautadas en relación con arrestos por delitos por tráfico de drogas, 2000-2006	425
Gráfico 2.	Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, por año y país, 2001-2006	426

Tabla 8.	Homicidios por cada 100.000 habitantes, 2001-2006	426
----------	---	-----

ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO
COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA, 2008-2009

Tabla 1.	Producción potencial de cocaína y área cultivada con coca en Colombia, Bolivia y Perú (número de familias involucradas en el cultivo, 2006-2008)	437
Tabla 2.	Plantas de procesamiento de cocaína destruidas, 2006-2008	437
Gráfico 1.	Producción potencial de cocaína (mt) en la región andina, 1994-2008	438
Tabla 3.	País de origen/destino, intensidad, víctimas, intención de trata	438
Tabla 4.	Países importadores, países vendedores, volumen total 2000-2005, productos principales	439

SEGURIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MARCO DE ANÁLISIS
EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Tabla 1.	Características: crimen común y crimen organizado	459
Organigrama.	Actores de seguridad	460
Tabla 2.	Empresas de seguridad privada (legales) en Centroamérica	461
Tabla 3.	Empresas de seguridad privada en Sudamérica	462
Tabla 4.	Entidades responsables de la fiscalización de empresas de seguridad privada	464
Tabla 5.	Capacitación de vigilantes de seguridad privada en algunos países	465

MAPEAMENTO SOBRE A INSTITUCIONALIDADE POLICIAL NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

Quadro 1.	Países observados	472
Quadro 2.	Instituições Policiais consideradas para o estudo	473
Quadro 3.	Organizações policiais na região	474
Quadro 4.	Organizações policiais e seus efetivos	475
Quadro 5.	Definições preliminares (versão mantida em espanhol)	477
Quadro 6.	Missão das organizações policiais, segundo suas leis orgânicas ²⁶	478
Quadro 7.	Funções das organizações policiais	479
Quadro 8.	Características das organizações policiais	479
Quadro 9.	Dependência legal	479

PARTE III

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA

ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA, 2008-2009

MARKUS SCHULTZE-KRAFT

INTRODUCCIÓN

Este artículo es una actualización y ampliación del primer trabajo sobre crimen organizado en Colombia y la región andina que el autor realizó para el Observatorio de Crimen Organizado en América Latina en 2008¹. Consta de tres secciones: 1) la actualización de los datos estadísticos disponibles sobre cultivos de coca y producción potencial de cocaína en la región andina, trata y tráfico de personas, y exportaciones e importaciones de armas pequeñas y municiones de guerra; 2) la descripción y caracterización de los actores internos y externos del crimen organizado en cada país/subregión, y de las principales políticas y programas para el combate al crimen organizado; y 3) un listado actualizado de fuentes seleccionadas sobre el crimen organizado en Colombia y la región andina.

1. ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA, 2008-2009

1.1 CULTIVOS DE COCA Y PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA EN LA REGIÓN ANDINA

TABLA 1. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA Y ÁREA CULTIVADA CON COCA EN COLOMBIA, BOLIVIA Y PERÚ (NÚMERO DE FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL CULTIVO, 2006-2008)

País	Producción potencial de cocaína (toneladas)						Área cultivada (hectáreas)						Número de familias involucradas en el cultivo	
	Unodc			ONDCP	USDOJ		Unodc			ONDCP	USDOJ		2007	2008
	2006	2007	2008	2006	2006	2007	2006	2007	2008	2006	2006	2006		
Colombia	610	600	430	718	550	535	78.000	99.000	81.000	157.200	157.200	167.000	80.000	59.328*
Bolivia	94	104	13	135	115	120	27.500	28.900	30.500	25.800	25.800	29.500	N/A	N/A
Perú	280	290	302	288	265	210	51.400	53.700	56.100	37.000	42.000	36.000	N/A	N/A
Total	984	994	845	1.141	930	865	156.900	181.600	167.000	220.000	225.000	232.500	N/A	N/A

* Unodc, Colombia-Coca Cultivation Survey, julio de 2009.

Fuentes: Unodc World Drug Report 2009; United States Department of Justice (USDOJ), National Drug Threat Assessment 2009; ONDCP, "Current State of Drug Policy: Successes and Challenges", enero de 2008.

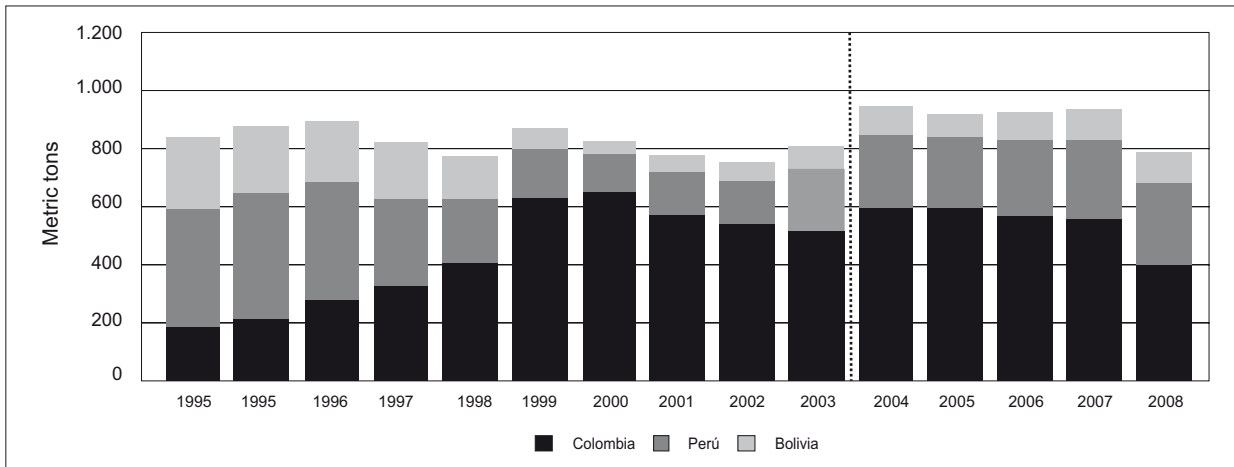
TABLA 2. PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE COCAÍNA DESTRUIDAS, 2006-2008

País	Laboratorios básicos			Laboratorios para pasta de coca y base de cocaína			Laboratorios para base de cocaína			Cristalizadores			Cristalizadores		
	Unodc			Unodc			Dpto. de Estado de Estados Unidos			Unodc			Dpto. de Estado de Estados Unidos		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Colombia	N/A	N/A	N/A	2.045	2.095	2.531	1.952	2.875	3.238	202	265	267	205	2401	301
Bolivia	6.268	6.268	7.557	4.070	3.087	4.988*	4.070	3.087	4.988	3	NA	NA	3	6	7
Perú	N/A	N/A	N/A	707	649	1.205	713	627	1.205	11	16	19	11	16	19
Total	6.268	6.268	7.557	6.822	5.831	68.724	6.735	6.589	9.431	216	NA	/NA	219	262	327

* Categorizados por Unodc como laboratorios de pasta de coca y cocaína en Bolivia y pasta de coca y base de cocaína en Colombia.

Fuentes: Unodc monitoreo de cultivos de coca 2009 (Bolivia, Perú, y Colombia); United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. International Narcotics Control Strategy Report. Volume I. Drug and Chemical Control, marzo de 2009.

GRÁFICO 1. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE COCAÍNA (MT) EN LA REGIÓN ANDINA, 1994-2008



Fuente: Unodc World Drug Report 2009.

1.1 TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

TABLA 3. PAÍS DE ORIGEN/DESTINO, INTENSIDAD, VÍCTIMAS, INTENCIÓN DE TRATA

País de origen	País (región de destino)	Intensidad de la trata a países destinos	Víctimas (mayoría de casos reportados)	Intención de trata (mayoría de casos reportados)	Comentarios
Bolivia	Argentina Brasil Perú Chile Estados Unido España	Mediano	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres Menores 	Explotación sexual /Trabajo forzado	
Colombia	Unión Europea Suramérica Centroamérica Estados Unidos Asia	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres Menores 	Explotación sexual trabajo forzado	
Ecuador	Colombia Venezuela España Chile Ecuador	Mediano	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres Menores 	Explotación sexual	
Perú	Perú	Mediano	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres Menores 	Explotación sexual Trabajo forzado	La mayoría del tráfico de personas en Perú es doméstico
Venezuela	México Caribe Estados Unidos	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Mujeres Menores 	Explotación sexua Trabajo forzado	Importancia por su carácter de país de tránsito

Fuentes: U. S. State Department, Trafficking in Persons Report, 2009; Unodc, Report on Human Trafficking, 2009.

Nota: Venezuela ha incrementado su importancia como país de tránsito en el tráfico de humanos. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, este país andino es utilizado como un punto de partida de Sudamérica para el tráfico de mujeres y menores hacia México, el Caribe, Norteamérica y Europa con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Una ruta utilizada con frecuencia lleva venezolanas/os a Curazao, tanto forzadamente como por medio de ofertas de trabajo falsas. De ahí son después traficados a Holanda y otros países de Europa occidental. A la vez, es importante destacar que no sólo son venezolanas/os lo que salen de Venezuela; también hay colombianas/os y ecuatorianas/os, entre otras nacionalidades, que son traficados por este país a mercados ilegales en el exterior.

1.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ARMAS PEQUEÑAS Y MUNICIONES DE GUERRA

TABLA 4. PAÍSES IMPORTADORES, PAÍSES VENDEDORES, VOLUMEN TOTAL 2000-2005, PRODUCTOS PRINCIPALES

País importador	Importaciones de armas pequeñas y ligeras (SALW), municiones, sus partes Vol. total 2000-2006 (dólares)	Ranking región andina	Vol. total (dólares)		Principales países vendedores 2000-2006 (>70%)	Productos principales 2000-2005 (>70%)
			2005	2006		
Bolivia	9'065.669	5	2'261.821	1'709.790	Estados Unidos España Brasil China	<ul style="list-style-type: none"> • Municiones • Armas pequeñas • Pistolas • Revólveres
Colombia	119'558.787	1	17'145.912	39'204.023	Estados Unidos Israel Sudáfrica	<ul style="list-style-type: none"> • Armas de fuego militares • Armas militares • Pistolas • Revólveres • Lanza granadas • Lanza llamas • Otros
Ecuador	16'901.922	3	2'563.758	2'434.345	Estados Unidos Brasil Francia	<ul style="list-style-type: none"> • Munición para armas pequeñas • Pistolas • Revólveres
Perú	16'655.239	4	2'692.177	4'192.824	España Estados Unidos Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Munición para armas pequeñas • Pistolas • Revólveres
Venezuela	52'632.112	2	3'034.903	19'490.436	Rusia Estados Unidos España Australia Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Munición para armas pequeñas • Pistolas • Revólveres • Armas de fuego militares

Fuente: Comunidad Segura. “El balance de la balanza: exportaciones e importaciones de armas pequeñas y ligeras (APL), sus partes y munición en América Latina y el Caribe 2000-2006”. En: En la mira 09/2008.

Nota: en la región andina se observa una tendencia de aumento en los gastos de defensa y seguridad. La tabla 4 muestra que el incremento de las importaciones de armamentos es particularmente marcado en Venezuela, Colombia y Perú. Hay un aumento importante en la compra de armas de Rusia, Irán, Israel y China. Por ejemplo, entre 2005 y 2008 Venezuela gastó más de 4.400 millones de dólares en adquisición de armamento de Rusia, incluidos veinticuatro aviones de combate Sukhoi, cincuenta helicópteros de combate, y 100.000 fusiles de asalto de última generación. A mediados de 2009, el presidente Hugo Chávez anunció que su país estaba negociando la compra de armamento por un valor de 2.200 millones de dólares a Rusia. Este negocio incluirá la adquisición de docenas de tanques de guerra rusos. Sin embargo, Venezuela no es el único país en la región que invierte en la compra de armas: Colombia y Bolivia también tienen contratos pendientes con Rusia, China y Estados Unidos.

2. AMPLIACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA

2.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CADA PAÍS/SUBREGIÓN²

2.1.1 COLOMBIA

Los narcotraficantes colombianos han evolucionado considerablemente desde la década de los ochenta. La extinción de los grandes carteles de la droga de Medellín y Cali en los años noventa, principalmente durante los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), se debió en parte al alto perfil de sus líderes y a sus estructuras verticales centralizadas, que los convirtieron en blancos cada vez más fáciles de combatir por las autoridades. Las organizaciones narcotraficantes de la actualidad son mucho más pequeñas y podría haber hasta 150 de ellas.

- *EL CARTEL DEL NORTE DEL VALLE Y SUS SUCESORES*

El cartel del Norte del Valle fue la única estructura lo bastante sólida como para retomar el negocio de los grupos de Medellín y Cali. Asumió el control de la mayor parte del tráfico de droga y expandió sus operaciones a finales del gobierno del presidente Samper y comienzos del de Andrés Pastrana (1998-2002). Compuesto originalmente por clanes familiares, era menos jerárquico y abarcador que sus predecesores, pues dependía más de filiales para el transporte y la venta. Cada vez más debilitado por la presión de las fuerzas de seguridad y por sus fricciones internas, hoy sólo siguen en el negocio unos pocos capos y sus socios, la mayor parte de los cuales han ascendido desde las filas de los viejos carteles grandes y han establecido sus propias redes.

Elementos de las facciones más fuertes de lo que era el cartel del Norte del Valle antes de que su jefe Diego Montoya (*Don Diego*) fuera deteni-

do en septiembre de 2007, y su segundo líder, Wilber Varela (*Jabón*), asesinado el 1 de febrero de 2008 en Mérida (Venezuela), siguen activos en toda la cadena de producción, transporte y distribución de cocaína, y también en el lavado de dinero. Ejercen coerción, intimidación y dominio territorial por medio de Los Rastrojos y Los Machos, sus respectivos grupos de sicarios, en su lucha por el control de rutas y acceso al producto primario. Mientras Los Machos siguen teniendo su base en el departamento del Valle, controlando laboratorios en zonas rurales y el acceso a ciudades y pueblos de la región y a lo largo de la costa Pacífica, Los Rastrojos –liderados actualmente por *Comba*– han buscado llenar el vacío que dejó la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), expandiendo su influencia en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Norte de Santander. Montoya centralizó el control operacional; Varela tendía a depender más de operadores independientes y grandes socios externos. A ambos les pagaban con frecuencia por “prestar sus nombres” a operaciones de narcotráfico en las que, aparte de eso, no participaban mayormente.

El desmantelamiento de los grandes carteles propició el surgimiento de individuos y grupos especializados en transporte y lavado de dinero. Algunos de los socios de los carteles de Medellín y Cali en los años ochenta y noventa, como *Beto* Rentería y Salomón Camacho, han mantenido un perfil más bajo, uniendo fuerzas con operadores más grandes, como Juan Carlos Abadía (*Chupeta*), arrestado en 2007, y Hermágoras González (*el Gordo*), capturado en Venezuela el 9 de marzo de 2008, para concentrarse en el lavado de grandes sumas de dinero por medio de inversiones legítimas. Otras personas han adquirido reputación como facilitadores de transporte internacional. Fabio Ochoa Vasco (*Carlos Mario*) ha sido vinculado con el transporte de cocaína y el lavado de dinero por el Caribe hacia México; se sospecha que Eduardo Restrepo Victoria (*el Socio*), enlace con el cartel de Tijuana en México, fue un importante socio

de Varela; se cree que Daniel Barrera (*el Loco*) obtiene droga de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a las que provee de precursores químicos, y que se ha asociado con grandes traficantes para sacar droga desde el aeropuerto internacional de Bogotá.

Actualmente, las autoridades colombianas temen el surgimiento de una nueva generación de narcotraficantes de bajo perfil que subcontratan gran parte de la cadena y son difíciles de detectar. Las redes de narcotraficantes que fungen de empresarios en ciudades grandes y medianas exportan regularmente pequeñas cantidades de cocaína por varios medios, como servicios postales, correos humanos (*mulas*), vuelos comerciales y barcos de carga.

En el extremo inferior de la cadena de producción sigue habiendo intermediarios entre los cultivadores de coca y las redes de narcotráfico en algunas regiones, sobre todo en aquellas con una mayor presencia militar y en donde las Farc no ejercen un control territorial, y en aquellas con una larga tradición de cultivos de coca. Aunque las Farc son compradoras cada vez más importantes de hoja de coca, pasta de coca y base de cocaína, los intermediarios en regiones como la serranía de La Macarena (departamentos de Meta y Caquetá) y a lo largo del río Putumayo (en las fronteras con Ecuador y Perú) siguen comprando el producto primario a los campesinos y transportándolo a granel a los laboratorios de cristalización ubicados en el departamento del Vichada y a lo largo de la costa Pacífica.

- *LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES*

El surgimiento de nuevos grupos armados ilegales en el país después de la desmovilización de los paramilitares de las AUC tiene que ver con el control de los recursos primarios de la droga—cultivos, instalaciones de procesamiento para producir pasta de coca, base de cocaína y cocaína pura, y rutas de narcotráfico regionales— que estos grupos buscan salvaguardar de otras organizaciones ilegales, incluidas las Farc. También tienen vínculos con estructuras nacionales y lo-

cales de narcotráfico. Por ejemplo, en la región del bajo Cauca, en el norte de Antioquia, miembros del antiguo bloque Central Bolívar de las AUC se han vuelto a armar y controlan centros de acopio de base de coca en zonas semi rurales; la Organización Nueva Generación (ONG), que mantiene la estructura del bloque Libertadores del Sur de las AUC, ha tratado de penetrar las comunidades cocaleras controladas por las Farc en las montañas de Nariño.

También se han detectado nuevos grupos armados ilegales involucrados en el narcotráfico y otras actividades criminales, como la extorsión y el robo de tierras, a lo largo de corredores estratégicos y en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá (algunos de ellos operan cristalizaderos). Entre los más notorios están el grupo de Arnulfo Sánchez González, *Pablo*, en la alta Guajira; el de Darío Usura, *Otoniel* o *Mauricio*, en los departamentos de Córdoba, Cesar, Antioquia, Chocó y Magdalena; el de César A. Torres Lujan en el sur de Bolívar; el de Walter Ochoa Guisao, *el Guerre*, en el Magdalena medio; las Águilas Negras, que operan (al parecer todavía sin un mando unificado) en varios departamentos en la costa Caribe y pacífica, en la frontera con Venezuela y Ecuador, así como en el interior de Colombia; el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac), liderado por Pedro Oliviero Guerrero, *Cuchillo*, en los departamentos de Guaviare y Vichada; y Los Paisas bajo el mando de Ángel de Jesús Pacheco Chancí, *Sebastián*, en Antioquia, Córdoba, Magdalena y Sucre.

- *LAS GUERRILLAS DE LAS FARC Y DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)*

Si bien la participación de las Farc en el negocio de la droga es generalizada, la naturaleza de dicha participación varía según la región. Según las fuerzas de seguridad colombianas, tienen presencia en 428 de los 1.100 municipios del país, incluidos 128 con cultivos ilícitos. El control que ejercen sobre poblaciones y territorios en zonas rurales les ha permitido definir las condiciones

para sembrar, cosechar y procesar coca. Las Farc también son las únicas compradoras de los productos primarios de coca en las áreas que controlan. Algunos de sus frentes han ascendido en la cadena para controlar el contrabando de precursores químicos y la producción de cocaína pura, y han establecido vínculos con organizaciones narcotraficantes internacionales. Las fuerzas de seguridad creen que algunos de los principales carteles mexicanos compran a las Farc hasta 55% de la cocaína que introducen a Estados Unidos, sea directamente o por intermediarios. Para facilitar el envío a los traficantes internacionales, las Farc han ido invirtiendo cada vez más en asegurar las rutas y los medios de transporte, y se sabe que han establecido nexos con redes centroamericanas que sirven de trampolines para desarrollar operaciones más grandes en México, Estados Unidos y Europa.

El Ejército de Liberación Nacional, más pequeño que las Farc, ha negado repetidamente su participación en negocios de droga, pero cada vez es más claro que sus frentes que operan en regiones productoras de coca y corredores estratégicos cerca de la frontera venezolana y al sur de la costa pacífica dependen de ingresos relacionados con el narcotráfico. Frentes militarmente debilitados en regiones como el sur de Bolívar, en donde los insurgentes tienen buenas relaciones con las comunidades, parecen depender más de los “impuestos” que cobran a los cultivos de coca; existe evidencia creciente de que los frentes más fuertes en Nariño, Cesar, Norte de Santander y Arauca están implicados en el procesamiento y el transporte de pasta de coca, base de cocaína y cocaína pura.

- *LOS CAMPESINOS*

Se sabe que los campesinos que cultivan y cosechan coca se han ido sofisticando, pues los niveles de producción se han mantenido a pesar de que el tamaño promedio de las parcelas se ha reducido en más de la mitad. Los campesinos también han aumentado la producción de base de cocaína, que se vende a un mayor precio. Al-

gunas autoridades colombianas creen que puede haber unas 100.000 familias involucradas; Unodc calculó que había 67.000 en 2006. En la cuenca del Orinoco (Vichada, Arauca, Casanare) y Meta-Guaviare, 85% y 65% de campesinos, respectivamente, producen base de cocaína. Pese a tener más conocimientos especializados, los campesinos siguen recibiendo apenas 2% de las utilidades que reporta el narcotráfico.

2.1.2 PERÚ

En los últimos años, las organizaciones narcotraficantes de Perú, que tradicionalmente han operado en grupos familiares muy organizados (clanes o “firmas”), han dejado de ser productoras de pasta de coca y base de cocaína para convertirse en productoras y exportadoras de cocaína de alta calidad. Aunque no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo de sus pares mexicanos o colombianos, existe un alto riesgo de expansión. La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú ha incautado en laboratorios clandestinos moldes para prensar la cocaína en “ladrillos” para la exportación, con logos distintivos de “firmas” para su identificación.

Los clanes peruanos son las principales organizaciones encargadas de la exportación, el transporte y la distribución de cocaína y “paco” (pasta base de cocaína) en los prósperos mercados de droga del Cono Sur. En asociación con traficantes brasileños, “firmas” peruanas en el valle del río Apurímac y Ene (Vrae) despachan cocaína en aviones pequeños cuyo destino es Brasil. Los clanes peruanos cuentan con la ayuda de familiares en el área de cruce a Chile de Tacna-Arica y Santiago, y también utilizan a Bolivia como país de tránsito para ingresar a Chile, Argentina y Brasil.

- *TRAFICANTES COLOMBIANOS Y MEXICANOS EN EL PERÚ*

Sin embargo, las principales operaciones de exportación de cocaína son manejadas por re-

presentantes de las organizaciones mexicanas y colombianas, lo cual ayudaría a explicar el aumento en la producción potencial de cocaína, así como las modalidades innovadoras de exportación. Estas organizaciones están en el Perú porque no existe capacidad local para competir por los mercados y garantizar la calidad y entrega del producto. Aunque se cree que los principales carteles de droga de México dirigen operaciones en el Perú, el vicéfiscal general para investigaciones especiales sobre crimen organizado de México, José Luis Santiago Vasconcelos, dijo en octubre de 2007 que el cartel de Sinaloa, que parece tener contactos en el país desde hace algún tiempo, era el único que contaba con la “capacidad logística y financiera” para dirigir operaciones de exportación importantes desde el Perú.

Desde 2002 existe evidencia creciente que indica que colombianos del cartel del Norte del Valle trabajan con el cartel de Sinaloa. Ambos grupos compran cocaína peruana que llevan hasta la costa pacífica mexicana. También hay indicios de que al cartel de Sinaloa, con ayuda colombiana, le interesa la etapa de procesamiento de cocaína. Un laboratorio clandestino destruido en 2007 era operado por químicos colombianos y se cree que pertenecía al cartel. Narcotraficantes colombianos también operan en Tocache (Huallaga) y en Monzón. Tres mexicanos y un colombiano que fueron arrestados en Lima a comienzos de noviembre de 2007 tenían en su posesión no sólo cocaína, sino también precursores químicos utilizados para la producción de amfetaminas.

- *REMANENTES DE SENDERO LUMINOSO*

Liderados por *Artemio* en el valle del Alto Huallaga y Aguaytía (entre Huánuco y Ucayali) y por *Alipio* en el Vrae, los dos remanentes de la agrupación guerrillera rural Sendero Luminoso han estructurado una fuerza con considerable capacidad militar que provee seguridad a los narcotraficantes. Según informes, a fines de 2004 los hombres de *Alipio* empezaron a cul-

tivar coca y procesar pasta de coca en pozas de maceración cerca de los ríos Mantaro y Ene. En los últimos dos años y medio, los dos grupos han incrementado las operaciones violentas en contra de la policía antinarcóticos y en contra de los funcionarios del gobierno, en lo que parece ser una nueva estrategia de “limpiar” los corredores de tránsito de policías “desafiantes” y otras presencias estatales. Los esfuerzos de erradicación manual forzada por parte de las fuerzas de seguridad se ven seriamente dificultados por las acciones armadas de Sendero. Por ejemplo, en Yanajanca (alto Huallaga) se detectaron campos minados y bombas caseras en las plantaciones de coca.

Entre agosto de 2008 y mayo de 2009, Sendero Luminoso dio muerte a 33 y lesionó a 48 miembros de las fuerzas de seguridad. Civiles también han sido afectados por la violencia desatada por Sendero en los epicentros del narcotráfico en Perú, a saber, las zonas del Vrae y alto Huallaga. Analistas conocedores del asunto estiman que el grupo guerrillero tiene entre 350 y 600 miembros. Sin embargo, la organización sufre de divisiones internas crecientes, que debilitan su cohesión y confinan su actividad a algunas regiones. El grupo que opera en el Vrae bajo el mando de los hermanos Quispe Palomino, que supuestamente formaron parte de la organización desde principios de la década de los ochenta, frecuentemente ha expresado su apoyo a coccaleros y parece tener una capacidad organizativa más desarrollada que su contraparte en el alto Huallaga. Pese a ello, se puede decir que en los últimos dos años, Sendero ha representado una amenaza cada vez más grande para el Estado peruano en lo referente al narcotráfico y la seguridad pública.

El incremento de las acciones armadas y la participación cada vez más profunda en el narcotráfico por parte de Sendero Luminoso, ha hecho que la política contrainsurgente cobrara otra vez más peso en el debate político en Perú. En general, el papel de Sendero en el narcotráfico parece confinarse a la protección de rutas

para narcotraficantes y al cobro de impuestos a coccaleros. El tráfico como tal parece estar todavía en manos de otros grupos pequeños de narcotraficantes y medianos acopiadores peruanos, así como de traficantes mexicanos que están ganando importancia en Perú. También hay indicios de que algunos grupos de Sendero tienen sus propios cultivos de coca y pozos de maceración. Lo cierto es que el enlace entre la organización y los narcotraficantes es clave para la sobrevivencia del grupo armado.

Pese a los rumores de que las Farc están operando en Perú, Crisis Group fue informado de que su presunta actividad a lo largo de la frontera y los operativos en el alto Huallaga, Ucayali y Aguaytía eran probablemente intentos de establecer corredores logísticos que comuniquen a sus tropas en Colombia, mas no participación en nuevas operaciones políticas o de narcotráfico.

2.1.3 BOLIVIA

En Bolivia no hay grandes organizaciones de narcotraficantes, pues allí la norma son clanes familiares pequeños y compactos, difíciles de infiltrar, que operan sobre todo en La Paz/El Alto y los departamentos de Cochabamba (centro) y Santa Cruz (oriente). Sin embargo, algunas organizaciones extranjeras pequeñas, sobre todo colombianas, peruanas y mexicanas, son activas en el país. Grupos bolivianos trafican cocaína del Perú para transportarla hasta Brasil, que también es el destino de cerca de 70% de la cocaína boliviana. La cocaína procesada en Cochabamba se lleva por la selva hasta pistas aéreas clandestinas en Beni, desde donde aviones livianos la transportan hasta el estado de Rondônia en Brasil, ya sea directamente o por Paraguay.

- *NARCOTRAFICANTES EXTRANJEROS EN BOLIVIA*

El principal lugar de salida de la cocaína boliviana es el departamento de Santa Cruz, en donde presuntamente viven dos miembros del Primeiro

Comando da Capital (PCC) de Brasil. A mediados de 2009, la policía boliviana encontró y destruyó dos cristalizadores de cocaína grandes en el departamento de Santa Cruz. En los operativos varios colombianos fueron detenidos.

La cantidad de extranjeros arrestados por tratar de llevar cocaína a Europa, sobre todo a España, desde el aeropuerto de Santa Cruz, ha aumentado. Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2007, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) arrestó a 94 bolivianos que intentaban pasar cocaína por los aeropuertos internacionales del país, así como a un número considerable de europeos.

- *LOS MERCADOS DE LA HOJA DE COCA Y EL NARCOTRÁFICO*

Se calcula que 10% de la hoja de coca que llega al mercado legal en La Paz se desvía hacia la producción de droga en otras partes. Según informes, se detectó complicidad entre algunos de los dueños de almacenes en el mercado y narcotraficantes. De acuerdo con funcionarios de la policía en La Paz y Buenos Aires, a Argentina se ha introducido ilegalmente hoja de coca legal para procesarla y convertirla en pasta de coca.

2.1.4 VENEZUELA

Los narcotraficantes colombianos están utilizando cada vez más el territorio venezolano para introducir su cocaína en Estados Unidos y Europa, en especial los estados de Zulia, Táchira y Apure, en el occidente y suroccidente del país. Algunas fuentes creen que la reubicación del tráfico por Venezuela se debe tanto a peleas entre narcotraficantes como al mejoramiento en la aplicación coercitiva de la ley en Colombia, sobre todo en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar. Es posible que las redes del crimen organizado estén utilizando, por lo menos como cubierta protectora, la gran cantidad de población colombiana que vive en Venezuela, de la cual cerca de medio millón tiene residencia legal pero que, según

algunos, asciende a tres o cuatro millones si se cuentan los inmigrantes ilegales.

- *NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS Y LA CRECIENTE VIOLENCIA CRIMINAL EN VENEZUELA*

Si bien las Farc y el ELN tienen presencia a lo largo de la frontera y algunos miembros de las Farc pueden manejar actividades relacionadas con el narcotráfico desde Caracas, las autoridades antinarcóticas venezolanas se han concentrado en combatir a los grandes narcotraficantes colombianos vinculados con el antiguo grupo paramilitar de las AUC, como Vicente Castaño (*el Profe*), Miguel Ángel Mejía (*el Mellizo*) y Salomón Camacho Mora, así como al cartel del Norte del Valle. Hay algunos indicios de que, incluso después de la desmovilización de las AUC, los individuos y grupos que tienen nexos con los paramilitares siguen siendo más perseguidos que los rebeldes.

Aunque no se sabe de capos del narcotráfico locales, la ausencia de controles adecuados para investigar los grandes montos de capital que ingresan a la economía es un caldo de cultivo perfecto para engendrar poderosas organizaciones narcotraficantes. Esto se refleja en la violencia que aqueja a los barrios tuguriales de Caracas, como Petare y Catía, impulsada por guerras territoriales por el control de actividades delictivas y criminales, entre ellas la distribución de droga para el consumo local.

- *CORRUPCIÓN OFICIAL*

La presunta participación de oficiales de la policía y el ejército en actividades de narcotráfico preocupa mucho. Un indicador plausible del fracaso de las autoridades en su lucha contra el tráfico de drogas, y posiblemente de su participación en este tipo de actividades, es la disminución de las incautaciones de droga en territorio venezolano al tiempo que dichos decomisos aumentan en otros países, incluyendo narcóticos procedentes de Venezuela. Otro indicador podría ser el hecho de que los narcotraficantes colombianos están utilizando documentos de identidad vene-

zolanos obtenidos ilegalmente para operar en el país. Miembros de las Farc, el ELN y traficantes colombianos parecen estar negociando en Táchira el tránsito de drogas con la Guardia Nacional y la policía de los municipios fronterizos. Se ha arrestado a agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Nacional cuando intentaban cargar pequeños aviones con cocaína.

Es posible que los narcotraficantes hayan corrompido a oficiales y funcionarios militares del más alto rango. Según se afirma, los oficiales buscan cargos a lo largo de la frontera colombiana para obtener ganancias. Dado que algunos tienen estilos de vida opulentos e incluso extravagantes, no es descartable que haya bastante corrupción. Se cree que un grupo de generales de la Guardia Nacional dirige una operación conocida como el cartel del Sol, que según se afirma controla las operaciones de tránsito a lo largo del eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro. Mauro Marcano, periodista y concejal de Maturín, estado de Monagas, en el nororiente de Venezuela, fue asesinado el 1 de septiembre de 2004 tras haber denunciado repetidamente al cartel del Sol. El 5 de marzo de 2007, el narcotraficante Ceferino García, sospechoso de ser uno de los líderes del mismo, fue arrestado bajo el cargo de ser el autor intelectual del asesinato. Sin embargo, ningún alto oficial de la policía o del ejército en el estado de Monagas ha sido llevado a juicio por cargos relacionados con narcotráfico. Marcano había hablado de connivencia entre García y el general Alexis Maneiro Gómez de la Guardia Nacional (un comandante de inteligencia y jefe del comando regional 7, con base en Puerto La Cruz), el coronel Juan Fabricio Tirry, jefe del destacamento No. 77 en Monagas, y José Manuel del Moral, ex jefe de policía en el estado de Monagas.

2.1.5 ECUADOR

Los grandes cargamentos de cocaína provienen sobre todo de la facción del cartel del norte del

Valle dirigida por Diego Montoya, arrestado hace poco. Trabaja mediante alianzas flexibles con grupos más pequeños que incluyen a ecuatorianos, colombianos y peruanos a cargo del transporte, el almacenamiento y la exportación. Las drogas atraviesan por tierra la frontera colombiana (Putumayo) hasta Puerto Francisco de Orellana (provincia de Orellana) y Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), a menudo transportada por mujeres y niños. Las Farc parecen estar cobrando un “impuesto” por el paso fronterizo de la cocaína o la pasta de coca, pero también se cree que participen en actividades de narcotráfico en Ecuador, sobre todo el frente 48 en la región fronteriza de Tulcán (Carchi, Ecuador) e Ipiales (Nariño, Colombia), y la columna móvil Teófilo Forero a lo largo de la ruta Mocoa-La Hormiga-San Miguel, en Putumayo. Se afirma que trabajan con grupos delictivos de Sucumbíos que manejan operaciones de contrabando de gasolina. Los principales compradores son los carteles mexicanos de Sinaloa, Juárez y Tijuana.

2.2 POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

2.2.1 COLOMBIA

La política antinarcóticos de Colombia está ligada a la política de seguridad democrática (PSD) del presidente Álvaro Uribe (2002-2006; 2006-2010), que tiene como objetivo recuperar la seguridad en zonas de conflicto en las que operan grupos armados ilegales que derivan ingresos del narcotráfico. El Plan Colombia, una estrategia conjunta con Estados Unidos, ha tenido como ejes principales la imposición coercitiva de la ley y los aspectos de seguridad en la lucha contra la droga. Inicialmente propuso un presupuesto de 7.500 millones de dólares (4.000 aportados por Estados Unidos), repartidos casi equitativamente entre programas militares y no militares. Sin embargo, dichas proporciones se alteraron prácticamente desde el comienzo, pues los costos de los helicópteros y los aviones de alas fijas utilizados para la fumigación y la

erradicación segura le dieron más peso al lado militar.

Aunque los objetivos antinarcóticos, que fueron los que más acogida tuvieron en Estados Unidos, están lejos de haberse cumplido del todo, su papel en la lucha contra los grupos insurgentes Farc y ELN se cuestiona poco. Sin duda, el Plan Colombia fortaleció a las fuerzas de seguridad del gobierno y les permitió, desde 2002, confrontar a unas Farc cada vez más poderosas y lograr éxitos militares importantes, y también proceder con la desmovilización de los principales grupos paramilitares. Sin embargo, el balance no es del todo positivo: el proceso de desmovilización ha sido objeto de críticas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las organizaciones de derechos humanos interamericanas siguen acusando con argumentos verosímiles a las fuerzas armadas de violación de los derechos humanos, las Farc y el ELN siguen activos y todavía no se han solucionado los problemas estructurales subyacentes, sobre todo en las áreas rurales.

Documentos del gobierno colombiano señalan que de los 10.700 millones de dólares invertidos por Bogotá y Washington entre 1999 y 2005, el 57,5% se destinó a la erradicación de cultivos de coca mediante fumigación aérea y medios manuales, y a la modernización de las fuerzas de seguridad; el 26,6% se destinó al fortalecimiento institucional, incluido el sector judicial. Algunos observadores independientes señalaron que estas cifras podrían subestimar los fondos colombianos que se invierten en la Policía y el Ejército para el desarrollo de actividades antinarcóticos, porque es difícil desagregar los gastos destinados a actividades de contrainsurgencia y a actividades contra la droga. La sola financiación de Estados Unidos fue de 6.300 millones de dólares hasta el año fiscal 2009.

Los esfuerzos por controlar los cultivos ilícitos, principalmente mediante fumigación aérea, arrojan resultados ambiguos. Durante su aplicación inicial, la fumigación contribuyó a la rápida reducción del área de dichos cultivos,

de 102.000 hectáreas en 2001 a 80.000 en 2004. Sin embargo, pese a una tasa sostenida de fumigación –más de 130.000 hectáreas anuales desde 2002, con un pico de 172.025 hectáreas en 2006–, el área cultivada aumentó a 86.000 hectáreas en 2005 y disminuyó apenas ligeramente a 78.000 en 2006. Según Unodc, más de 70% de los cultivos identificados en 2006 estaban en zonas nuevas. Por otra parte, la reducción de la parcela promedio y el desarrollo de técnicas para proteger los cultivos han significado que sólo 25% de los que han sido fumigados por aire se han erradicado de manera permanente; el resto vuelve a crecer rápidamente. Según Unodc, en 2007 había 99.000 hectáreas de coca y en 2008 bajó a 81.000 hectáreas.

La dudosa efectividad de la fumigación aérea ha fomentado el incremento de la erradicación manual. Desde fines de 2004, el gobierno ha establecido más de 130 grupos de erradicación manual (GEM) de 30 hombres, y entre 2002 y 2006 la técnica se amplió desde 2.762 hectáreas hasta 42.110, y ha sido más efectiva, pues sólo 15% de las parcelas analizadas por Unodc han experimentado resiembras. Algunos funcionarios colombianos dicen que el programa pronto se ampliará aún más, aunque este método se sigue utilizando para complementar, mas no para sustituir, la fumigación aérea, porque es difícil implementarlo en zonas de conflicto.

La prioridad asignada a la aplicación coercitiva de la ley y a la interdicción produjo al comienzo mejores resultados. Las incautaciones de cocaína aumentaron de 95,2 toneladas en 2002 a 168,4 en 2005, y bajaron luego a 130,9 en 2006, en gran parte, según creen los expertos, debido a cambios en las técnicas de tráfico. De modo similar, el incremento exponencial de la capacidad de las fuerzas de seguridad permitió inicialmente a las autoridades ser más efectivas en la interrupción de los movimientos de cocaína. La interdicción aérea incrementó rápidamente la detección de vuelos sospechosos, de 141 en 2002, cuando se reactivó el Plan de interdicción aérea con Estados Unidos, a 462 en 2004. El tráfico marítimo, que según se creía

cubría cerca de 78% del comercio de la droga, se pudo controlar mejor gracias a una mayor cooperación con Estados Unidos; aunque los expertos creen que la reducción en el número de barcos sospechosos detectados en 2006 se debió, por lo menos en parte, a la capacidad de los traficantes para adaptarse a las circunstancias, como planear vuelos por territorios no monitoreados a lo largo de la frontera con Venezuela y pasar cargamentos más pequeños por las fronteras con Brasil y Perú.

Si bien las autoridades colombianas han puesto énfasis en sus golpes contra las finanzas de las organizaciones delictivas y los grupos armados ilegales, la capacidad de las redes de narcotráfico para lavar activos parece haberse visto afectada apenas marginalmente. La introducción del sistema de oralidad en los juicios (oral accusatory system) y de una ley que penaliza la financiación del terrorismo le ha dado al Estado nuevas herramientas para combatir el lavado de activos, pero éstas aún no se utilizan plenamente. Desde su creación en 1999, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), una institución independiente que antes estaba vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha mejorado la detección de flujos de dinero sospechosos, de cerca de 399,1 millones de dólares en 2002 a 559 millones en 2005. La Unidad de Control de Lavado de Activos de la Fiscalía aumentó gradualmente la extinción de dominio, al pasar de 1.099 activos en 2002 a 4.348 en 2006, y expropió 6.627 activos en ese mismo periodo. Sin embargo, la diversificación de los métodos de lavado de activos y la habilidad para explotar tanto las lagunas jurídicas en las reglamentaciones nacionales como la falta de capacidad de las autoridades para monitorear las operaciones de cambio de divisas han mantenido a los traficantes un paso por delante. El director de la Uiaf, Mario Aranguren, admitió que a través del sector financiero colombiano se blanquean hasta 8.000 millones de dólares anuales de dinero del narcotráfico.

2.2.2 BOLIVIA

El presidente Evo Morales (2006-2010; 2010-) es muy consciente de la sensibilidad política que reviste la coca en su país. El enfoque de su gobierno de izquierda es “cocaína no, coca sí”. Todavía lidera a las seis federaciones de sindicatos de cocaleros en la región del Chapare (departamento de Cochabamba), y los movimientos sociales y sindicatos relacionados con los cultivos son una parte importante de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS). A fines de 2006, el gobierno lanzó su Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca 2007-2010, que tiene un doble objetivo: “a) racionalizar, estabilizar y controlar la producción de hoja de coca en un nivel sostenible mediante la participación social; y b) garantizar los propósitos legítimos de la coca producida”.

La erradicación forzada del excedente de coca ha sido reemplazada por la erradicación consensual, cuyas metas están siendo establecidas por los sindicatos de cocaleros. En el Chapare, el control del área de coca ha contado con el apoyo de la exitosa implementación del principio según el cual cada miembro del sindicato puede cultivar un “cato” de tierra. La erradicación de la coca cubrió un total de 6.250 hectáreas en 2007, más de 1.000 más que en 2006, la mayor parte en el Chapare. El gobierno intentó registrar cada hectárea de coca en esta zona para fin de año mediante mecanismos de “control social”, que incluyen alentar a los vecinos y miembros de los sindicatos a denunciar violaciones de la regla de un “cato”. Tanto la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de la Policía Nacional como el viceministerio de Defensa Social han recibido un número creciente de informes de cocaleros advirtiendo sobre los cultivos en exceso, sobre todo en el Chapare.

El éxito de la erradicación voluntaria y el “control social” parece estar estrechamente ligado al prestigio del presidente Morales entre los campesinos de su bastión político en el Chapare. Por el contrario, los cocaleros de la región de

los Yungas (al norte de La Paz) se han mostrado reticentes a erradicar. Sus cultivos han crecido constantemente en los últimos tres años, y el gobierno sólo ha logrado la erradicación voluntaria de 1.250 hectáreas. Desde 2006, la asistencia para desarrollo alternativo de la Unión Europea (UE) se ha desplazado del Chapare a los Yungas. Tiene como objetivo construir mejores carreteras e infraestructura, prestar servicios educativos y sociales así como fomentar la siembra de cultivos alternativos con el fin de mejorar el nivel de vida y desalentar la coca. La UE también incluye el enfoque de “control social” en sus programas en los Yungas, para dar coherencia a la estrategia global del gobierno. Sin embargo, si se quiere reemplazar la coca como principal fuente de ingreso para 50.000 familias, es preciso que haya otros cultivos rentables al alcance de los campesinos.

Aunque los cocaleros del Chapare parecen respetar las medidas del gobierno para frenar los cultivos de coca, en los parques naturales vecinos, Isiboro Secure y Carrasco, los cultivos han aumentado considerablemente; los parques del departamento de Santa Cruz también corren peligro. Esto sugiere que los campesinos sin tierra e incluso agricultores del Chapare podrían estar entrando ilegalmente a los parques para talar el bosque primario y sembrar coca para producir cocaína. El gobierno dice estar comprometido con el uso de las Unidades Móviles de Patrullaje Rural (Umopar) de la Felcn para erradicar estos cultivos, con resultados escasos hasta el momento.

El gobierno ha apoyado iniciativas tendientes a legitimar varios aspectos de la producción de coca: aumentar el límite legal nacional de los cultivos de coca de 12.000 a 20.000 hectáreas; abrir un tercer mercado legal para hojas de coca en Caranavi (al norte de La Paz); una reglamentación comercial de junio de 2006 que permite a los cocaleros vender hoja de coca no procesada en los mercados nacionales sin utilizar a comerciantes minoristas como intermediarios; un artículo (384) en la nueva Constitución, aprobada en enero de 2009, que estipula que la hoja de

coca es parte del patrimonio cultural nacional; y la campaña para retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas de la Convención de las Naciones Unidas sobre drogas.

Como los cultivos de coca actuales se extienden a 30.500 hectáreas, según Unodc, un tope de 20.000 hectáreas significaría una disminución sustancial y, al mismo tiempo, una meta realista. Sin embargo, el gobierno necesita poder imponer el cumplimiento de ese límite y garantizar que las 20.000 hectáreas se utilicen exclusivamente para consumo e industrialización tradicionales. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuánta coca se necesita para abastecer la demanda tradicional. El Instituto Nacional de Estadística (INE), con financiación de la Comisión Europea, adelanta un “Estudio integral de la hoja de coca en Bolivia”, que incluye ocho estudios sobre aspectos específicos, está siendo realizado, cuya conclusión se espera a finales de 2010.

Pese al fuerte liderazgo del presidente Morales y al apoyo popular con que cuenta, el presidente y su partido, el MAS, dependen de los sindicatos de cocaleros y los movimientos sociales para el apoyo callejero. Después de los violentos enfrentamientos entre los cocaleros y los habitantes urbanos en Cochabamba el 11 de enero de 2007, que dejaron un saldo de dos muertos y cientos de heridos, los cocaleros se han movilizado en varias ocasiones para “defender” de la oposición de derecha al gobierno de Morales y a la Asamblea Constituyente, que concluyó su trabajo en diciembre de 2007.

Las fuerzas armadas y la Fiscalía general cooperan, compartiendo recursos y realizando operaciones conjuntas. Sin embargo, la Felcn necesita tecnología de vigilancia electrónica y apoyo logístico, y sobre todo helicópteros propios. Bolivia realiza interdicción de precursores químicos en el marco del acuerdo Precan de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como la Operación Seis Fronteras, una iniciativa de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (Idec) que cubre los países andinos más Venezuela y Brasil. Sin embargo, con el fin

de impedir el transbordo de cocaína peruana es indispensable controlar mejor las fronteras con Perú y Brasil.

De hecho, a Brasil le preocupa el tráfico desde territorio boliviano. La capacidad de Bolivia para frenar el flujo de droga ha disminuido desde que Estados Unidos redujo su participación directa en sus operaciones antinarcóticos, y desde que la Drug Enforcement Agency (DEA) fue expulsada del país, en 2008. Por consiguiente, a Brasilia y a La Paz les interesa establecer una comisión bilateral y un diálogo de alto nivel para mejorar los mecanismos de respuesta, en especial para cooperación de inteligencia.

2.2.3 PERÚ

Al igual que en Bolivia, desde hace siglos los pueblos andinos del Perú han cultivado la coca para fines tradicionales como mascar la hoja y preparar té y remedios medicinales. En 1978, la ley general de drogas permitió el cultivo de coca para satisfacer la demanda tradicional (calculada en 9.000 toneladas de hoja de coca anuales) y prohibió cualquier excedente. Así mismo, estableció el registro de cocaleros y el monopolio de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) para la comercialización e industrialización de las hojas. Los cultivos de coca en el Perú, país que antes era el mayor productor del mundo, se redujeron notoriamente entre 1995 y 1999, de 115.300 a 38.700 hectáreas. Sin embargo, en la primera década del siglo XXI los cocaleros han ido reactivando los campos, incrementando los cultivos hasta abarcar 56.100 hectáreas en 2008, según Unodc, y elevando la producción de hoja de coca hasta alcanzar 114.100 toneladas en 2006, de las cuales 92% se desvía a la producción de droga.

Para reducir las áreas cocaleras que exceden la demanda interna anual estimada, el gobierno desarrolla dos tipos de erradicación manual: voluntaria –“gradual y concertada” según las autoridades– y forzada, o “programada”. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), creada en 2002 para diseñar,

coordinar e implementar políticas de control de drogas, es la entidad encargada de los programas voluntarios, que tienen como complemento programas de desarrollo alternativo. En 2004 se erradicaron en total 2.733 hectáreas según ese esquema, 3.266 en 2005 y 2.551 en 2006. Más de 62.000 familias en 779 comunidades han participado en el programa. La erradicación forzada de cultivos ilícitos, adelantada por la Unidad de Control y Reducción de la Hoja de Coca en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior, ha aumentado año tras año, de 7.605 hectáreas en 2004 a 8.966 en 2005 y 10.137 en 2006. Más de 5.800 familias en 87 comunidades en Tocache han participado, con la ayuda de Unodc y Usaid.

Los programas de desarrollo alternativo de Devida se implementan en el bajo, medio y alto Huallaga, Aguaytía, Pichis, Pachitea, Apurímac, Tambopata y Pasco-San Gabán, pero no hay programas de erradicación en el valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae) o en las zonas de Monzón. En el Vrae, la policía se concentra en la destrucción de las pozas de maceración de los laboratorios de pasta de coca y cocaína; muchos consideran al valle de Monzón como una tierra de nadie, en donde los coccaleros están decididos a oponerse a la erradicación y a la que las autoridades temen ir.

Con la ayuda de las agencias de desarrollo de Estados Unidos y la UE, el banco de desarrollo alemán (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) y Unodc, los campesinos pueden crear cooperativas para cultivar productos como cacao, café, palmitos y aceite de palma, que se exportan principalmente a Europa, Norteamérica y Asia. Sin embargo, se requieren políticas más efectivas de acceso a mercados, con el fin de aumentar las exportaciones y atraer a más campesinos para que dejen de cultivar la coca para uso ilícito. Esto implica desde la construcción de carreteras para llevar los productos a los puertos, hasta el fortalecimiento de las redes comerciales y la eliminación de cuotas y otras barreras comerciales. Un alto funcionario del gobierno advirtió que muchos campesinos que optaron por el desarrollo

alternativo pero no lograron ganarse la vida así, han vuelto a sembrar coca.

Mientras el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) concentró sus esfuerzos en una erradicación que no logró frenar la expansión de la coca, la Estrategia nacional 2007-2011, del gobierno del presidente Alan García (2006-) pareció en un inicio enfatizar la prevención, la rehabilitación de drogadictos, la interdicción de las redes de narcotráfico y el desarrollo en las áreas afectadas para desincentivar los cultivos. Pese a que se les aseguró que la erradicación forzada no iba a ser un elemento central de esta estrategia, los campesinos dicen que ha aumentado, e incluso los registrados por la Enaco están sujetos a erradicación sin previo aviso.

En abril de 2007, luego de bloqueos de carreteras y protestas violentas organizados por las asociaciones de coccaleros en Tocache (alto Huallaga), Huánuco y Aguaytía (Ucayali), el presidente García le ordenó al ministro del Interior, Luis Alva Castro, “bombardear” las pozas de maceración con aviones de guerra, una táctica muy criticada por considerársela poco realista. La violencia exacerbada de los narcotraficantes contra policías, jueces y fiscales reforzó la línea dura del gobierno. El 19 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, propuso al Congreso incrementar el presupuesto de las fuerzas de seguridad y la reactivación de bases militares en el Amazonas para combatir el terrorismo y la insurgencia. El gobierno fue objeto de críticas cuando algunos grupos fuertemente armados, que se sospecha son remanentes del movimiento Sendero Luminoso que todavía operan en la zona del Vrae, mataron a cinco policías e hirieron a varios más. Esos grupos protegen importantes corredores de tráfico hacia la costa y Bolivia.

Como parte de la estrategia para combatir a la insurgencia y el narcotráfico, el gobierno del presidente Alan García ha lanzado una ofensiva contra Sendero Luminoso en el Vrae y en alto Huallaga. El Plan Vrae es un asunto muy importante en el discurso político en Perú, y hay un

debate fuerte sobre la mejor forma de combatir a la guerrilla y el narcotráfico. Hasta ahora parece que además de un esfuerzo militar en la zona, el Estado peruano intentará promover el desarrollo alternativo como una forma de ganar los corazones y las mentes de la población, intentando involucrar a las estructuras de gobierno local en este esfuerzo. Sin embargo, en agosto de 2008 las fuerzas armadas peruanas lanzaron la Operación Excelencia 777 en el Vrae para combatir la amenaza insurgente por la vía militar, que incluye el establecimiento de cinco bases en la región, con más de cien efectivos en la más grande. En alto Huallaga, las fuerzas armadas peruanas tienen una estrategia militar para acabar con el frente de *Artemio* en la región. Esta estrategia ha logrado dificultar los negocios y el movimiento del grupo. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, la amenaza de Sendero Luminoso para el Estado peruano persiste.

Varias leyes recientes han aumentado las condenas por lavado de activos (2004, 2007) y han mejorado el control sobre los precursores químicos (2005) y la confiscación/recuperación de propiedades (pérdida de dominio). Además, la Dirandro está reforzando su capacidad de investigación en materia de lavado de activos, y trabaja estrechamente con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Registraduría Pública y la Superintendencia de Banca y Seguros. Según un alto funcionario de la Dirandro, “queremos ubicar no sólo a los narcotraficantes sino también sus activos y los activos de sus redes”. Sin embargo, ningún capo ha comparecido todavía ante la justicia.

2.2.4 VENEZUELA

Durante muchos años, Venezuela cooperó estrechamente con las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos. Sin embargo, poco después de posesionado el presidente Hugo Chávez en 1999, prohibió los vuelos de interdicción con tripulación mixta sobre el territorio venezolano. Estados Unidos dice que Venezuela no se ha

comprometido plenamente con el control del narcotráfico desde 2005, cuando se suspendió el convenio bilateral de cooperación en la lucha contra la droga, y que hoy en día es el principal lugar de transbordo de la droga colombiana.

Como los narcotraficantes explotan todas las rutas a los mercados, la cooperación internacional es esencial. La animadversión de Chávez hacia el gobierno de George W. Bush (2001-2005: 2005-2009) impidió dicha cooperación. Venezuela ya no forma parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Este (Joint Interagency Task Force-East, JIATF), cuyos radares monitorean vuelos y barcos en el Caribe y a lo largo de la costa sudamericana. Las autoridades venezolanas parecen no estar ni siquiera dispuestas a recibir inteligencia en tiempo real. La falta de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela preocupa a los funcionarios de la Unión Europea, quienes dicen que también es más difícil detener a los narcotraficantes en el Caribe debido al retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.

Las autoridades venezolanas insisten en que están logrando un progreso unilateral, pero que requieren reciprocidad en cualquier sociedad. Aseguran que Estados Unidos utiliza la guerra contra las drogas para sus propios fines políticos y que Venezuela se ha convertido en uno de los países que más incautaciones de cocaína ha hecho, pese a carecer de los cuantiosos recursos que Washington aporta a otros. Dicen que hay cooperación con muchos países, pese al alto costo que implica la interdicción. Dicha cooperación, sobre todo con Colombia y los países del Caribe, es vital. Sin embargo, altos funcionarios dicen que las relaciones con Colombia han ido empeorando progresivamente, porque a este país se lo percibe como un lacayo que repite las críticas de Estados Unidos. Sin embargo, estas críticas no sorprenden cuando es posible señalar aumentos sustanciales de vuelos rastreados por radar de Venezuela a La Española. Estados Unidos sostiene que Venezuela no ha actuado con base en información que le ha suministrado sobre dichos vuelos.

Los funcionarios venezolanos insisten en que su país es serio en la lucha contra el narcotráfico, y mencionan las leyes orgánicas de 2005 contra el tráfico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y contra el crimen organizado. A comienzos de 2006, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) reemplazó a la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid). Se espera que el plan antinarcóticos del gobierno para 2008-2013 haga énfasis en impedir que la droga ingrese a Venezuela, en vez de concentrarse en combatir el tránsito hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, algunos observadores señalan que las oficinas antinarcóticos de campo carecen a menudo de los recursos adecuados.

El control del narcotráfico se basa en programas tendientes a lograr que las comunidades cooperen activamente con la ONA y la policía; se puede denunciar a los pequeños expendedores de droga en los barrios y otros sitios llamando a una línea telefónica gratuita o en la página web de la ONA. En la primera reunión del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional (de la Organización de los Estados Americanos, OEA), en julio de 2007, se habló sobre programas de protección a testigos, pero no hay indicios de que esto se vaya a incluir en el plan nacional o de que la ONA vaya a reforzar las unidades de inteligencia humana que operan contra las redes de narcotráfico.

Las autoridades venezolanas reconocen la necesidad de fortalecer la seguridad. Para mejorar la vigilancia en los puertos y aeropuertos se comprarán al Reino Unido nuevas unidades de rayos-x; las empresas de transporte aéreo, fluvial y marítimo tendrán la responsabilidad de tomar medidas más estrictas; en todas las regiones se construirán hornos para incinerar las drogas incautadas; y la vigilancia aérea se mejorará con el uso de los recién comprados jets de combate de fabricación rusa para la interdicción de vuelos sospechosos, y con la introducción de un sistema de identificación de amigo o enemigo (Identification Friend or Foe, IFF). Se prestará especial atención al nuevo sis-

tema de vigilancia del espacio aéreo, que exige cuantiosas inversiones adicionales en tecnología, incluida una red de radares de fabricación china para cubrir la costa y la frontera colombiana a partir de 2008 (una fuente informada afirma que probablemente sólo estén operando plenamente después de 2012). La facultad para derribar aeronaves no identificadas requiere de una nueva ley.

Las autoridades son conscientes también de la necesidad de fortalecer los recursos humanos, tanto como de acabar con la corrupción. A fuerzas especiales de la Guardia Nacional y de la armada se les encomendará la vigilancia marítima en el delta del Orinoco y el sur del lago de Maracaibo; la junta directiva del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística (CICPC) fue reestructurada, y se abrieron oficinas en varios lugares del país. La ONA ampliará su cobertura nacional y reemplazará a los comisionados regionales por oficinas en cada estado y municipio; la Fiscalía General está trabajando estrechamente con este organismo en la investigación de los oficiales corruptos.

La ONA no ha reportado erradicación forzada de cultivos ilícitos marginales (amapola, coca y marihuana) desde 2006. Después de un reconocimiento aéreo sobre los estados de Apure y Amazonas el 29 de noviembre de 2007, descartó las imputaciones de cultivos de coca en la región amazónica. No obstante, el gobierno está considerando la posibilidad de vigilancia satelital regular de la frontera con Colombia y para desalentar los cultivos ilícitos planea poner en marcha programas de desarrollo alternativo en las regiones fronterizas. La ONA también coordina una unidad de inteligencia financiera sobre lavado de activos, en la que la Fiscalía General, el CICPC, el Notariado y la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) investigan conjuntamente operaciones e inversiones sospechosas. Además, la ONA conserva la custodia de los activos incautados, mientras que el sistema judicial se encarga de los casos de expropiación.

Sin embargo, los críticos argumentan que Venezuela no está preparada para afrontar el lavado de activos relacionados con la droga. Hay pocos fiscales y el país, con su precario marco institucional, se ha convertido en santuario para tales operaciones. Sus indicadores macroeconómicos son poco confiables, sobre todo en lo que respecta al gasto público. Los economistas temen que esta situación se agudice debido a las ganancias producidas por el alto precio del petróleo, la falta de transparencia en las exportaciones y el ingreso de la empresa estatal de petróleos (PDVSA) y la coexistencia de una tasa de cambio fija con un mercado del dólar paralelo sin control.

Para monitorear los precursores químicos, el Ministerio de Industria Liger y Comercio creó un registro nacional en 2006 de conformidad con la ley contra el tráfico ilícito y el consumo de drogas y sustancias psicotrópicas. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos dicen que no tiene personal capacitado ni recursos para rastrear las irregularidades y hacer las inspecciones de campo necesarias. La ONA está a cargo de las acciones en contra del desvío de químicos, pero no se sabe a ciencia cierta cómo las va a coordinar con los otros países andinos ahora que Venezuela ya no es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Aunque algunos observadores internacionales creen que el gobierno está tomando medidas positivas contra las drogas, el tiempo corre en contra de la ONA y se necesitan de inmediato más acciones, sobre todo en contra de la corrupción generalizada. Pese a las reiteradas declaraciones oficiales en el sentido de que el presidente Chávez le ha asignado prioridad a la lucha contra el narcotráfico, se cree que mientras no haya una coordinación adecuada con las fuerzas de seguridad los traficantes seguirán operando con impunidad. La confusión en torno a posibles reformas en la estructura de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la oposición a reformas drásticas en la policía contribuye a la percepción de caos y renuencia a abordar el asunto. También es probable que el apoyo abierto del presidente

Chávez a las Farc, buena parte de cuyas finanzas provienen del narcotráfico, limite la energía que las fuerzas de seguridad dediquen a frenar el tráfico.

2.2.5 ECUADOR

Las políticas antinarcóticos no sólo tienen como fin frenar el tránsito de las drogas colombianas y peruanas y el contrabando de precursores químicos desde el país, sino también prevenir los cultivos de coca y la producción de drogas, que todavía se realiza a escala muy pequeña. Así mismo, hay acciones contra el lavado de activos. El organismo que se encarga principalmente de esto es el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). Unodc ayuda con entrenamiento.

Sin embargo, algunas fuentes dijeron que al Consep no se le asignan los recursos requeridos para cumplir su mandato, en especial en lo que respecta a la reducción de la demanda. Aunque mucho más bajas que en Argentina y Chile, las tasas de consumo de cocaína y pasta de coca son más altas que en Bolivia y Perú. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que estableció el gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2009; 2009-) en noviembre de 2007 debe trabajar con el Consep en el diseño de programas de prevención del consumo de drogas.

Desde 2001, Ecuador ha introducido varias iniciativas de desarrollo en sus provincias fronterizas del norte –Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Imbabura y Orellana– con el fin de frenar el cultivo de la coca. Estas iniciativas han estado a cargo de la Unidad de Desarrollo de la Frontera Norte (Udenor), adscrita a la Presidencia. Sin embargo, la unidad va a ser absorbida por la secretaría técnica del Plan Ecuador de Correa, lanzado en abril de 2007 con el fin de promover el desarrollo y la seguridad integral en las provincias del norte.

En comparación con los tres principales países productores, los cultivos de coca en Ecuador

son insignificantes. En 2006, el área total de cultivos de coca se calculó en menos de 100 hectáreas, aunque algunas fuentes dicen que ahora podría haber 300. El hecho de que el número de áreas de coca erradicadas entre 2006 y 2007 se haya doblado indica, como mínimo, que los cultivos ilícitos están aumentando. Esmeraldas y Sucumbíos son especialmente vulnerables, pues comparten frontera con los departamentos de Putumayo y Nariño al sur de Colombia, que a pesar de haber emprendido una erradicación forzada masiva en los últimos años, todavía tienen grandes áreas de cultivos de coca.

La policía nacional tiene la responsabilidad de combatir las redes de narcotráfico. La Dirección Nacional Antinarcóticos, creada en 1999, tiene veintidós bases en el país. El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) se encarga de operaciones como la erradicación. A comienzos de 2007, el Ministerio del Interior estableció la Comisión de Apoyo a la Modernización para ayudar en la reestructuración de la policía, incluida una nueva fuerza comunitaria y una policía judicial, más esfuerzos proactivos contra el crimen organizado y nuevas políticas de seguridad. Sin embargo, algunas fuentes dicen que el ministerio no está dirigiendo los programas antinarcóticos de la policía, y más bien deja que las decisiones se coordinen directamente entre la policía y la embajada de Estados Unidos.

Según el *Libro blanco de la defensa nacional* de 2006, los militares sólo desempeñan una función de apoyo contra las drogas, aunque en los últimos dos años han ido participando cada vez más. Hay doce destacamentos con más de 8.000 soldados en la frontera norte. En 2007, el ejército detectó en esa área y destruyó veinticinco campamentos presuntamente pertenecientes a las Farc de Colombia, algunos con laboratorios para el procesamiento de cocaína. De conformidad con la ley de soberanía energética e hidrocarburo de abril de 2007, a los militares se les exige también controlar el contrabando de combustibles refinados (“gasolina blanca”) a Colombia, en donde se utilizan como precursores químicos para producir cocaína allí y en el Perú.

Los vuelos desde el puesto de operaciones de avanzada (Forward Operating Location, FOL) de Estados Unidos en Manta, que dejó de funcionar a finales de 2009 dado que el gobierno del presidente Correa decidió no renovar el convenio sobre la base con Estados Unidos, detectan rutas de narcotráfico al oriente del Pacífico y en la región andina, incluidas las zonas de cultivo en Perú, Colombia y Bolivia. Se cree que en 2006 el 60% de las incautaciones en el Pacífico occidental resultaron de esos vuelos. Sin embargo, cuando el convenio sobre la base expiró, en noviembre de 2009, el gobierno no lo renovó. En vez de eso, el presupuesto de defensa de 2008 se incrementó con el fin de comprar barcos de patrullaje y aeronaves no tripuladas para combatir a los traficantes.

Como se dijo, en abril de 2007 el gobierno aprobó la ley de soberanía energética e hidrocarburo, que estipula medidas contra el tráfico de combustibles refinados. Las pérdidas anuales por concepto de esta actividad podrían fluctuar entre 200 y 1.000 millones de dólares. Las familias que viven a lo largo de la frontera y los grupos delictivos son responsables. Las primeras se oponen a la ley mediante huelgas; los segundos libran guerras territoriales por el control de la “gasolina blanca”, sobre todo en la población de Shushufindi (provincia de Sucumbíos). Ecuador adoptó el dólar en 2000 como su moneda oficial, con lo cual facilitó indirectamente el lavado de dinero por parte del crimen organizado. Las remesas de los ecuatorianos que viven en el exterior también podrían estar contribuyendo al problema: en 2006 sumaron 2.920 millones de dólares, y entre enero y julio de 2007, 1.440 millones de dólares. La implementación de la ley para reprimir el lavado de activos de 2005 ha afrontado varios problemas debido a cuellos de botella procedimentales y financieros; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tiene la responsabilidad de investigar los fraudes, sólo empezó a funcionar plenamente en 2009.

3. LISTADO ACTUALIZADO DE FUENTES SELECCIONADAS

- AFP, “Venezuela to buy Russian arms, tanks: Chávez”, 8 de mayo de 2009.
- Associated Press (AP), “Cocaine trade revitalizes Peruvian rebels”, 10 de mayo de 2009.
- BBC, “Peru guerrillas tread a new path”, 1 de febrero de 2009 (Ayacucho).
- Caracol Radio, “Once bandas criminales dominan el narcotráfico en Colombia”, 20 de marzo de 2009 (Bogotá).
- Comunidad Segura, “El balance de la balanza: exportaciones e importaciones de armas pequeñas y ligeras (APL), sus partes y munición en América Latina y el Caribe 2000-2006”, en: *En la mira*, 09/2008.
- Coordinadora Nacional de Radio (CNR), “Cinco menores de Ucayali prestan servicio militar en bases del VRAE”, 15 de abril de 2009 (Lima)
- El Espectador*, “Las ‘bandas criminales emergentes’”, 3 de marzo de 2009 (Bogotá).
- El Tiempo*, “Alarma por auge de bandas de ex paramilitares en el país”, 18 de agosto de 2009 (Bogotá).
- European PressPhoto Agency (EPA), “Policía y columna de Sendero Luminoso se enfrentan tras la incursión a un campamento”, 22 de julio de 2009 (Lima).
- Indepaz, “Cuadro comparativo de informes sobre nuevos grupos paramilitares 2008”, s.d. (Bogotá).
- Info Región, “Nuevo jefe del Plan VRAE debe trabajar en función de demandas de autoridades de la zona”, 23 de agosto de 2009 (Lima).
- International Crisis Group, Las drogas en América Latina I y II, marzo de 2008 (Bogotá/Bruselas).
- IPS News, “All Political Violence Is Not Terrorism”, 4 de agosto de 2008 (Roma).
- New York Times*, “Cocaine Trade Helps Rebels Reignite War in Peru”, 17 de marzo de 2009 (Nueva York).
- Seguridad Ciudadana, “Narcotráfico en el Huallaga: de las ‘firmas’ a las pymes”, 30 de mayo de 2008 (Lima).
- ONDCP, “Current State of Drug Policy: Successes and Challenges,” enero 2008 (Washington DC).
- Schultze-Kraft, Markus, “Narcotráfico en América Latina: Un nuevo consenso internacional”. *Política Exterior*. 126, noviembre-diciembre de 2008 (Madrid).
- Unodc, *Report on Human Trafficking*, febrero de 2009 (Nueva York).
- Unodc, *World Drug Report 2009*, junio de 2009 (Nueva York).
- Unodc, *Estado plurinacional de Bolivia-Monitoreo de cultivos de coca*, junio de 2009 (Nueva York).
- Unodc, *Perú-Monitoreo de cultivos de coca*, junio de 2009. (Nueva York).
- Unodc, *Colombia-Coca Cultivation Survey*, julio de 2009 (Nueva York).
- U. S. State Department, “Trafficking in Persons Report”. junio 2009 (Washington).
- U. S. State Department: Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, “International Narcotics Control Strategy Report. Volume I. Drug and Chemical Control”, marzo 2009 (Washington).
- United States Department of Justice (USDOJ), *National Drug Threat Assesment 2009*. (Washington).

NOTAS

- 1 Agradezco el apoyo de investigación que me brindó Anthony Richard Dest en la elaboración de este documento.
- 2 Las dos secciones siguientes citan de manera extensa a los informes de International Crisis Group, “La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha” y “La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños”, publicados el 14 de marzo de 2008 y elaborados por el autor y su equipo en la oficina de Crisis Group en Bogotá.